



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

### SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 89561/2015

**AUTOS: “ACCION PROMOCIONAL S.R.L. c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD SCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Buenos Aires,

### AUTOS Y VISTOS:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 89/104 contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Fiscalización del MTEySS, obrante a fs. 85/84 que impuso una multa al quejoso, en virtud de las infracciones cometidas al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N° 655/05 y sus modif..

Que a fs. 139, el organismo ministerial ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820 y art. 10, inc b) de la Resolución MTSS 655/2005, a los fines de la apertura de la instancia judicial.

Que no obstante la omisión apuntada, la aquí accionante, en su escrito recursivo, deduce la inconstitucionalidad de la exigencia del “solve et repete”, a la luz –fundamentalmente- de los preceptos que emergen de los tratados incorporados al plexo constitucional a partir de la reforma de 1994, al tiempo que esgrime la imposibilidad económica de hacer frente a la erogación. En tal sentido, refuerza su posición la denuncia de quiebra ocurrida en fecha 20/11/14.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

Que en el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su –actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia en tanto en el sub examine se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, corresponde la apertura formal del remedio intentado.

Fecha de firma: 19/12/2024

Alta en sistema: 03/02/2025

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#27664496#439213814#20241213114205109

Que la cuestión a resolver, de conformidad con lo expresado a fs. 92/103, se circunscribe a las facultades del ministerio y la nulidad del acta determinativa.

Que, en primer término cabe señalar que el artículo 36 de la ley 25.877 faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades concurrentes con la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Así, en tanto no ha sido rebatida la constitucionalidad de la norma, no ha de prosperar el embate dirigido en tal sentido.

En orden a la nulidad de las actas, cabe señalar que ellas no configuran un acto administrativo en sentido estricto conforme lo regla el título III de la ley 19.549, sino que deben considerarse como un acto preparatorio del mismo (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.05.96 "Grasso, Jorge Claudio c/ D.G.I."). Las diligencias que se cumplen con la intervención de los inspectores -con las facultades que les acuerda la normativa vigente -y que se instrumentan a través de las actas de infracción que se notifican al interpelado, no son más que constataciones de la situación del contribuyente frente al organismo administrativo, siempre sujetas a revisión.

Por ello, debe desestimarse el planteo de nulidad efectuado, toda vez que la inspección notifica las infracciones en las que ha incurrido el contribuyente mediante la confección de "actas de infracción", sirviendo las mismas como intimación para el ingreso de los montos resultantes; máxime que las quejas se dirigen exclusivamente a la situación laboral del inspector actuante sin referir la existencia de algún vicio que pudiera contener el instrumento cuestionado que fuera merecedor de análisis.

En estas condiciones no resulta razonable la nulidad invocada pues el contribuyente en todo momento pudo ejercer su derecho de defensa, ya que tuvo pleno conocimiento de las actuaciones administrativas, así como la posibilidad de fundar los argumentos que justificarían su posición tanto en sede administrativa como judicial.

Que en orden al cargo formulado, cabe tener presente, que en el caso de multas derivadas del incumplimiento de las obligaciones para con los sistemas de seguridad social, la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. El elemento subjetivo no tiene relevancia, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte.

La RG 1566, no es una norma penal, sino que se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la Ley N° 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma y tiene por finalidad castigar el ingreso tardío de los aportes necesarios para el financiamiento del sistema.

Dicha norma establece que una vez verificada la infracción, se aplica una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa en relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado, sin atribuir relevancia a las circunstancias de hecho de índole subjetiva para eximir o atenuar la multa correspondiente (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.07.07 -y aclaratoria del 17.05.07-, "Urbani, Ricardo Luis").

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; disponer su rechazo y confirmar la resolución ministerial cuestionada; y 2) Sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.). Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.).

Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

**SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 RJN).**

